



Masas n°429 - 1 de Febrero de 2023 - \$50

4 masas

órgano del PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO de Argentina
Sección del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional

Las empresas que desabastecen



DEBEN SER ESTATIZADAS
bajo control obrero colectivo



¡Viva la rebelión popular en Perú!

REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS



Las empresas que desabastecen, atentando contra la alimentación y la salud de la población, deben ser expropiadas y estatizadas bajo control obrero colectivo

El INDEC dio a conocer que la canasta básica que mide la pobreza **aumentó 100,3% en el año**, más del 94,8% que marcó el Índice de Precios al Consumidor a lo largo del 2022. Solo una minoría de trabajadores pudo empatar o apenas superar esa inflación.

El programa de “Precios Justos” empezó el 11 de noviembre, vigente hasta el 31 de marzo, con el objetivo de extenderlo cuatro meses más o todo el año. Precios Justos arrancó con un abastecimiento del 70%. A fines de diciembre, cayó fuertemente el volumen entregado, y en las primeras semanas de enero apareció de forma más dramática y visible con góndolas directamente vacías y productos que no se consiguen.

De las 30 empresas más grandes del programa “Precios Justos”, que estableció aumentos acordados de los precios de cerca de 2.000 productos de la canasta básica, cerca de **25 entregan menos de la mitad de la mercadería demandada**. Sólo cinco firmas aportan productos del plan por encima del 50% y apenas dos están arriba del 80%.

Ante la intervención de gremios como Camioneros, movimientos de desocupados, de hacer un relevamiento del abastecimiento de los productos y sus precios, del programa “Precios Justos”, supermercados e industria, con sus medios de comunicación, armaron un frente antigremios y piqueteros. Hicieron un escándalo mediático en defensa de desabastecedores y remarcadores de precios.

Las empresas quieren sacar del medio a las agrupaciones, mostrando que les preocupa que se den a conocer sus maniobras. Necesitan total impunidad.

El Cronista, defendiendo los intereses de las empresas, informa que “las empresas no tuvieron más remedio que abrir las puertas de sus depósitos y centros de logística a dirigentes de Camioneros que, sin ningún respaldo legal, les pedían revisar sus stocks para tratar de detectar incumplimientos en sus compromisos de abastecimiento. Las multinacionales no sabían cómo explicar a sus matrices semejante movida, y ni los propios funcionarios encontraban palabras para justificarla”.

La oposición burguesa también cuestiona las revisiones y habilita formas de denuncia contra los controlantes.

Quieren repetir las mismas maniobras de siempre: firman un acuerdo de precios, le sacan algunas ventajas al gobierno y siguen haciendo lo mismo de siempre.

El poder económico rechaza los controles de camioneros. No quieren ninguna forma de control. La Secretaría

de Comercio los presiona diciendo que prepara acciones para elevar la participación popular en los controles del acuerdo.

Ante la presión de las empresas, el equipo económico empezó a desandar lo que denominaban “control de precios militante”, chantajeando con que “ponían en riesgo la renegociación del plan de Precios Justos, que podría no continuar”.

No alcanza con las multas. Las empresas se ríen. Consiguen jueces que se las quitan o rebajan. El aumento en los montos de las multas para las empresas incumplidoras -numerosas, y algunas de las más grandes- ya está probado que no sirve.

El alza permanente e indiscriminado de los precios tiene entre sus causas fundamentales la elevada concentración monopólica en la producción y distribución de los principales productos.

Debemos tener cuidado en cómo se presenta el tema de la participación popular en el control de precios. Por un lado es una confesión del gobierno, del Estado, de su impotencia para obligar a las empresas a que cumplan con sus acuerdos. El peligro es que pretenda utilizar a los trabajadores como instrumento del Estado capitalista, aunque moleste mucho a los empresarios.

Los trabajadores sí podemos tomar el control de la producción y la distribución, colectivamente, desde cada empresa, para revisar cuánto se produce, qué se produce, dónde se distribuye y cuáles son los costos reales, qué hacen con sus ganancias, etc. Y hacer pública esa información. Los trabajadores podemos exigir que las empresas abran sus libros, queremos conocer sus verdaderos números, todas sus operaciones. Así actuaremos en defensa propia y de la gran mayoría oprimida que es saqueada por las empresas. El control debe nacer en las distintas etapas de producción.

Este tipo de control es cualitativamente distinto del que se pretende desde el gobierno que quiere convertirnos en su instrumento.

Lo que corresponde es terminar con toda forma especulación y desabastecimiento por parte de los monopolización en la producción y distribución. Las empresas ni siquiera quieren cumplir la llamada “ley de góndolas” o con la exhibición de los precios en las etiquetas, ni con las leyes de abastecimiento. Lo que corresponde es confiscarlas inmediatamente y ponerlas a trabajar bajo control obrero colectivo.

Algunas de las empresas que desabastecieron:

Fargo: empresa de panificados, que tiene alrededor de 20 productos en Precios Justos, envió en los últimos 15 días sólo el 19% de lo que le demandaron los supermercados.

Arcor: la alimenticia de los Pagani cumplió con el 32%.

Bagley: producción de galletas saladas y dulces, también propiedad de Arcor, tiene 27 productos en el programa, entregó el 59% de la mercadería pedida.

Café La Virginia: elaboración de infusiones, que también aporta café La Morenita, no está entregando nada.

Quilmes: cervecería, un 28% promedio para su gama de productos.

Pepsi: cumplió sólo con el 38%.

Colgate Palmolive: la empresa de pastas dentales y jabones cumplió con un 64% del abastecimiento

Danone: la alimenticia francesa vendió el 53% de lo pedido por los supermercados.

Las Marías: elabora yerba, que produce entre otras marcas a Unión, proveyó 30% promedio.

Johnson y Johnson: la empresa de EEUU 23%.

Loreal: la compañía francesa de cosméticos y belleza entregó solo un 18%.

Kimberly Clark: una de las multinacionales líderes en productos de higiene a nivel mundial aportó un 42%.

Unilever: la marca que elabora mercadería de limpieza y alimentos vendió por un 52%.

Procter and Gamble: conocida como P&G, la empresa de EEUU de bienes de consumo entregó 37%.

Nestlé: la multinacional suiza dedicada a los dulces, aguas y bebidas abasteció un 52%.

Mondelez: la exKraft nivel de entrega del 64%.

Quickfood: la marca de carnes congeladas 53%.

Morixe: la harinera vendió un 31%.

Molinos Río de la Plata: empresa líder de la industria alimentaria en América Latina entregó un 35%.

Papelera del Plata: gigante nacional del papel sólo 32%.

Manfrey: la fábrica láctea aportó al programa sólo 28%.

La Embajada, las multinacionales, los grandes capitalistas, quieren detener el juicio político a la Corte

El Departamento de Estado norteamericano pidió al Gobierno “respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes”.

Hubo una gran presión sobre el Congreso por parte de 500 empresarios de poderosos grupos económicos y grandes estudios jurídicos para detener el juicio político, que dirigieron una Carta al Congreso.

Dirigida a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para que “desistan del intento” del proceso contra los cortesanos. No importa que no tengan los votos para sentenciar a los jueces. No quieren que se ventilen las denuncias.

Para todos ellos la Corte está por encima de todos los poderes y lo que decida no puede ser revisado, ni criticado por nadie, aunque sus decisiones violen las leyes y se atribuya facultades legislativas o gubernamentales que no le corresponden. Manteniendo elementos corruptos en sus jerarquías, con total impunidad y haciendo ostentación de ese poder intocable.

Nunca olvidaremos su decisión de querer permitir la liberación de los genocidas de la última dictadura que tan buenos servicios prestó a esos grupos económicos. Decisión que tuvieron que anular por la extraordinaria movilización popular inmediata que los obligó a dar marcha atrás. ¡Ese fue el mejor juicio político a estos miserables!

Las corporaciones defienden incondicionalmente esta Corte porque asegura todas sus exigencias. Nunca va a cuestionar los crímenes de estas organizaciones contra el país, contra los trabajadores. Dicen que esta garantía es lo que permitirá que lleguen inversiones. Una burla al sentido común: ¿Por qué no vinieron esas inversiones? Si tenían una Corte propia.

La institución del Juicio Político es parte de la Constitución Nacional. Es el mecanismo previsto para enjuiciar

a los miembros de la Corte. No están planteando tribunales populares ni cosa que se le parezca, simplemente están planteando un Juicio Político que se rige por las reglas ya establecidas.

¿Qué es lo que temen los empresarios, qué temen los Jueces? Qué es lo que no quieren que se ventile. Su poder también se basa en la oscuridad, en el ocultamiento de sus acciones, lejos del escrutinio público.

La cabeza de la Justicia podrida y descompuesta, corrupta, no podrá ser reformada, aunque cambien a todos sus hombres, aunque aumenten la cantidad de Jueces. El sistema no se puede reformar. Es parte de una máquina descompuesta que debemos tirar al basurero de la historia.

Los empresarios que firman la carta amenazan al Congreso con “un período de turbulencia política” si no da marcha atrás con su iniciativa.

La iniciativa empresaria estuvo bajo la coordinación de Guillermo Lipera (ex presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad), Juan Vaquer (presidente de ACDE) y Santiago Mignone (tesorero de IDEA). Empresarios como Enrique Cristofani (Banco Santander), Roberto Murchinson (Grupo Murchinson), Gerardo Cartellone (Grupo Cartellone), Nicolás Braun (La Anónima), Luis Bameule (ex Quickfood), Lisandro Bril (Axia Ventures) y Alejandro Elztain (CRESUD), rubricaron el documento que reúne unas 500 firmas. También firmó Amcham y Ledesma.

Ellos son la minoría más concentrada del país, dueños de los grandes medios de producción, fugadores, vaciadores, saqueadores del país, explotadores.

Sólo habrá Justicia para las mayorías cuando se puedan organizar verdaderos tribunales populares, apoyados en la movilización de masas, para terminar con todos los crímenes de la dictadura del capital.

EDESUR debe ser estatizada

Sabemos que este gobierno, como los anteriores, están atados a sus compromisos con el capital financiero, con las políticas neoliberales, y no se atreven a contradecir ningún principio.

A lo que ya hemos dicho en prensas anteriores agregamos la denuncia que hace el secretario general de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía, Carlos Minucci, de que los dueños de Edesur rematan activos de la empresa antes de irse del país, en venta por “Mercado Libre”.

Exige que se intervenga la empresa para que no se lleven nada y que pase a manos del Estado. “Nosotros tenemos los mejores profesionales. Ellos lo único que traen son contadores y abogados. Ellos vienen a hacer negocios financieros, no de energía”.

Los dueños de la distribuidora energética Edesur, la firma italiana Enel, avanzan en un vaciamiento de la empresa antes de retirar sus inversiones del país.

“Denunciamos que se vendieron celdas de media ten-

sión. Hay una página que es de remates y ahí hay un título que es de remates de Edesur. Hay cerca de 136 lotes que se van renovando... Como es online, no podemos ver los productos que se venden. Esto se dio a conocer porque las celdas de media tensión, que son nuevas, importantes, aparecieron en venta también por Mercado Libre”.

Edesur debe ser estatizada bajo control obrero colectivo, no queremos que sea entregada ni a los amigos de Massa y Fernández ni a ningún privado. No debe quedar impune el robo y el saqueo. Deben devolver hasta el último centavo que se llevaron.



Las concesiones hidroeléctricas deben pasar a manos de los estados nacional y provinciales

Es inminente el vencimiento de las concesiones hidroeléctricas, que desde ahora y en los próximos años deberán terminarse, como bien alertan Mempo Giardinelli y la Carta del senador Oscar Parrilli a la secretaria de Energía Flavia Royón.

Producto de la reforma menemista, a estas privatizaciones por 30 años les tocan vencimientos a partir del próximo 11 de Agosto, empezando por las más grandes centrales hidroeléctricas de la región del Comahue: El Chocón, Arroyito, Planicie Banderita y Alicurá. Deben volver al único dueño, que es el Estado Nacional con participación de algunas provincias. Parrilli sugiere que la Secretaría informe “con la suficiente anticipación... que al terminar los contratos no habrá renovación, ni nuevas concesiones y que las represas volverán al dominio del Estado nacional tal y como lo indican los contratos”.

Hoy es imperativo el urgente rescate del manejo estatal de la energía, de explotación de esas centrales, con participación mayoritaria del Estado Nacional y las Provincias involucradas, sin intervenciones privadas.

La disputa se intensificará a partir de Agosto y por lo menos durará cuatro años, en que vencerán 17 concesiones en el sector hidroeléctrico, cuya generación representa un 20% del total del Mercado Eléctrico Mayorista.

Parrilli afirma que no hubo inversiones de los concesionarios privados para el mejoramiento y expansión del sistema hidroeléctrico. “Si bien las concesiones generaron abultadas ganancias durante todos los años, esa renta no redundó en inversiones para el mejoramiento y expansión

del sistema hidroeléctrico. Más bien ocurrió lo contrario porque la potencia instalada redujo notoriamente su participación en el sistema eléctrico argentino, que pasó del 43 al 25 por ciento, según datos oficiales”. Denuncia que “según los informes del Banco Central estas concesionarias formaron parte de la extraordinaria fuga de divisas acontecida durante el gobierno de Mauricio Macri”.

Sobre las represas del Comahue, Parrilli presentó en noviembre un proyecto de ley para que “al vencimiento de la concesión sean administradas por Enarsa en sociedad con las tres provincias patagónicas”. Dando garantía y seguridad a los trabajadores de su efectivo traspaso a Enarsa y en condiciones, también que se debe contemplar el estado actual de multas, sanciones y demás incumplimientos de las concesionarias (refiriéndose a casos conocidos de pérdidas de agua en la localidad de Neuquén) y reclama que se inicien las negociaciones con los gobiernos provinciales para acordar los términos y mecanismos de la futura administración”.

Habrà que chocar con los intereses privados al servicio de mandantes extranjeros, que tienen sus abogados, medios de comunicación y políticos, y millones de dólares para corromper voluntades. No debemos olvidar su principio, de que el Estado debe estar al margen de cualquier actividad económica, a la que se han subordinado todos los gobiernos. Sólo la intervención decidida de la clase obrera, con sus propios métodos, acaudillando a la mayoría oprimida puede defender este patrimonio contra la voracidad parasitaria del gran capital.

No se debe exportar un gramo de litio sin procesar ¡El litio se está regalando! Terminemos con el saqueo

No es el país el que planifica el mejor uso de sus recursos en función de sus prioridades sino las transnacionales que planifican cómo apropiarse de nuestra riqueza. La industrialización del país es una tarea que la burguesía no pudo cumplir, y que lo que se desarrolló en el siglo pasado comenzó a destruirlo, privilegiando la primarización de la economía. El ordenador de la economía no debe ser nunca pagar la deuda externa fraudulenta o alimentar los bolsillos de una clase parasitaria y en descomposición.

La industrialización debe tener un carácter federal para desarrollarse cerca de las zonas de producción, y también se debe tener el extremo cuidado de cómo se transformará la vida de las poblaciones que viven actualmente y desde hace siglos. Cómo se utilizará el agua, como evitar las contaminaciones.

Hay entrega por parte de los gobiernos, hay corrupción. La diferencia entre exportar una tonelada de litio en bruto y otra producida puede ser de 100 veces. Son decenas de miles de millones de dólares. Ese es el tamaño de la gigantesca corrupción empresario-gubernamental que quiere acelerar la exportación del litio sin procesar. Cuando hablamos de industrializar no nos referimos a la transformación del litio en hidróxido de litio, que involucra un proceso químico, con plantas industriales, porque no deja de ser una incorporación mínima de valor. Nos referimos a la

producción de baterías.

Todas las denuncias son muy valiosas pero es necesario pasar a la acción, para impedir que se apropien de este recurso esencial. La clase obrera que no tiene ninguna atadura con el capital es la única que puede encabezar esta lucha, con sus propios métodos, que tiene una importancia vital.

En los proyectos no se discute qué pasa con los pueblos que habitan hace cientos de años en las zonas litíferas, qué pasa con el agua, con su economía. ¿Quién representa sus intereses? Gobierno y oposición actúan en bloque en defensa del interés de las transnacionales. No puede haber un proyecto nacional sin contemplar sus intereses. Los gobiernos y las empresas sólo defienden y aplican las leyes que garantizan la gran propiedad y sus ganancias, aquellas leyes que puedan poner un límite a su voracidad son desechadas, son letra muerta.

Toda la legislación antinacional debe ser derogada. Cualquier Ley que vaya en contra del interés general de los oprimidos debe ser derogada, no se puede aceptar que en nombre de la seguridad jurídica para los capitales parasitarios se defienda legislación preparada por ellos. Hay plena coincidencia entre oficialismo y oposición en que las leyes antinacionales deben permanecer y ser respetadas, porque es mandato del capital financiero.

EE.UU. tiene como objetivo apoderarse de las riquezas minerales de América

Hace pocos días, **Laura Richardson**, jefa del **Comando Sur de EE.UU.**, habló en un evento del **Atlantic Council** -de estrechos lazos con la OTAN-.

“¿Por qué es importante América latina?”. Se preguntó Laura Richardson y la general norteamericana relató un listado de razones por las cuales el país norteamericano posa sus ojos en el resto del Continente. ¿El denominador común del inventario? Todos los aspectos destacados derivan de los “**ricos recursos y elementos de tierras raras**”.

Destacó, en primer lugar, el **triángulo del litio**, zona estratégica que comparten Argentina, Bolivia y Chile. “60% del litio del mundo se encuentra en ese triángulo”, y agregó que ese elemento es “necesario hoy en día para la tecnología”.

Otra de las razones por las cuales América latina es importante para EEUU es la concentración de “**las reservas de petróleo más grandes**”, incluidas las de “**crudo ligero y dulce** descubierto frente a Guyana hace más de un año”. “Tienen los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro”, quien también destacó la **importancia del Amazonas**, al describirlo como “**los pulmones del mundo**”. Y “**tenemos el 31 % del agua dulce del mundo** en esta región”. Con ese inventario, la jefa del Comando Sur

dijo que a EE.UU. le queda “**mucho por hacer**”. “**Tenemos que empezar nuestro juego**”.

Fundado en 1961, Atlantic Council lo integran desde Henry Kissinger a Condoleezza Rice, políticos republicanos y demócratas, militares retirados de EE.UU. y ex funcionarios de la CIA.

The Wall Street Journal afirma que “Argentina es la gran esperanza para el aprovisionamiento global de litio por estar más abierta a la iniciativa privada”. Alerta sobre “el problema del peronismo y su búsqueda de que el Estado intervenga en la explotación del litio”.

The Economist (UK) resalta que “a diferencia de Chile y Bolivia, el litio no se considera un recurso estratégico en Argentina” y que “el Estado juega un papel pequeño”, lo que es muy bien visto por los inversionistas. Afirma que “**las leyes mineras son difíciles de cambiar**”. Veremos este aspecto en el punto sobre la Ley de La Rioja.

Sin estatizar el litio no hay cómo desarrollar la industria. Hasta tal punto llega la dominación y humillación imperialista que YPF tiene que importar litio porque las dos empresas que producen en Argentina, una en Catamarca y otra en Jujuy, no le venden.

Las recientes medidas proteccionistas de EE.UU. y cómo afectan a la Argentina

El embajador argentino en EE.UU. Argüello transmitió algunas consideraciones al gobierno de EEUU respecto del posible impacto que podría tener la Ley para la Reducción de la Inflación (IRA) en el comercio bilateral.

“Otros países, socios comerciales de Estados Unidos, están planteando la misma preocupación. Dicha disposición, que concede subsidios a vehículos eléctricos condicionados al **contenido norteamericano de minerales críticos para baterías**, podría generar incentivar un redireccionamiento de las exportaciones argentinas de litio a otros mercados”. El Embajador tal vez no tiene en cuenta que nuestro litio es considerado por EE.UU. como “su” propiedad. La Ley

de EE.UU. beneficia fiscalmente por insumos comprados en su país o en mercados con los que tiene acuerdos de libre comercio.

Argüello mismo lo reconoce cuando pide que se clarifiquen ciertas disposiciones a fin de no afectar el flujo de exportaciones que **han llevado a la Argentina a ser el primer proveedor de litio a los Estados Unidos**. Es difícil que abandone ese lugar para que sea ocupado por China o Europa.

Lo que es seguro es que la política ultraproteccionista de EEUU rechazará la radicación de plantas de baterías para autos eléctricos en la Argentina con destino a su mercado.

Ley en La Rioja considera al “oro blanco” como recurso estratégico

La ley provincial de La Rioja N°10.608 de diciembre pasado declara a este mineral y sus derivados como **recurso estratégico** y plantea la posibilidad de **cancelación de concesiones**.

No impacta tanto a los proyectos actuales -más localizados en Catamarca y Jujuy-, pero es denunciada por los empresarios porque “es dañina por el antecedente que genera”.

Después de la reforma constitucional de 1994 cada provincia puede adoptar su propia política minera.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, defendió la Ley señalando que de este modo los permisos de explotación vuelven a la provincia y que, luego, se invitará a las empresas a invertir pero “siempre que le convenga a los riojanos, a La Rioja, al país y a las empresas también”. Quintela rechaza que se nacionalice el litio, si reclama que la política industrial sea nacional.

Dice que el objetivo es que las empresas mineras “no se lleven la riqueza de nuestro país” y que el litio después “vuelva como producto terminado”. “Las empresas que tenían las concesiones no hicieron absolutamente nada. Por lo tanto, hicimos que caducaran todas las licencias y vuelvan a la propiedad de la provincia”.

“El Gobierno tiene que tener una fuerte presencia en la negociación de cómo industrializar la materia prima del litio en el país”, y criticó que “la mayor porción de la torta se la llevan las empresas”. “Vamos a poner nuestras condiciones porque es nuestro el litio, de los argentinos, no de ellos”.

La reacción inmediata de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarca) y de la Unión Industrial Argentina (UIA) deja en evidencia que la norma tocó puntos sensibles para sus intereses al suspender por 120 días, prorrogables por el mismo lapso por única vez, los permisos de cateo, prospección, exploración y concesiones mineras relacionadas al litio en toda la Provincia. Lo entienden como una expropiación.

La Cámara de proveedores mineros aseguran que es una

“mala señal de estabilidad jurídica”, que se da “a metros” de un proyecto como Josemaría, en San Juan, en límite con La Rioja, y donde se prevé una inversión histórica superior a 5000 millones de dólares para volver a producir cobre en Argentina.

El 21 de enero el **IADEM** (Instituto Argentino de Derecho para la Minería) reclamó al gobernador Quintela que se abstenga de promulgar la “ley del litio”. Dice que la norma provincial **debe ser declarada “inconstitucional”** y **pide la derogación** de la norma sancionada en la Legislatura y publicada en el Boletín Oficial del 17 de enero. Que “sus previsiones sean declaradas inconstitucionales por los tribunales o por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Afirma que “La regulación de fondo de los minerales se encuentra en el Código de Minería de la Nación; se trata de una facultad delegada por la Provincia a la Nación de conformidad con la Constitución Nacional. El Código de Minería regula, entre otros, los mecanismos de adquisición, mantenimiento y terminación de los derechos mineros (cateos y concesiones, entre ellos) por lo que la Provincia de La Rioja no puede arrogarse la facultad de regular estas cuestiones”.

Argumentan que “la suspensión o caducidad de cateos o concesiones mineras por causas distintas a las previstas en el Código de Minería de la Nación invade la esfera de regulación delegada al Congreso Nacional y La Rioja **no puede disponer una suspensión generalizada de todos los derechos mineros existentes en la provincia, ni los vinculados al litio ni a ningún otro mineral**. Resulta curioso que la Ley, aunque se centra en el litio, luego expande la suspensión de derechos a todas las demás sustancias minerales”.

Dice que respecto de los artículos 4° y 5° de la ley “colisión con las disposiciones de los artículos 8° y 9° del Código de Minería de la Nación, que establecen, respectivamente, que **la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas como dueños, se concede a los particulares con arreglo a las prescripciones de dicho Código, y**

que el Estado no puede explotar ni disponer de las minas, sino en los casos expresados en el Código”.

Parrilli denuncia que ese marco normativo que tanto elogian se basa en “el Código de Minería de 1886. Allí se aclara que el Estado, si bien es el dueño de los salares y minas, no puede explotarlos. Tiene que concesionarlos a un privado para que lo haga. El privado se transforma en el dueño del salar o mina para siempre y puede venderlo, alquilarlo o heredarlo, como si fuese un departamento o un auto”. “Por explorar salares y minas de litio las empresas pagan por única vez un canon de \$1.600 por 500 hectáreas. Cuando ya tienen la concesión para explotación, pagan \$320 anuales por cada 100 ha”.

El artículo 4° de la Ley N° 10.608 de La Rioja establece que La Función Ejecutiva “determinará zonas de interés de investigación en el territorio de la Provincia y quedarán caducos los permisos que se hubiesen otorgado por la autoridad minera, estableciéndose que **cualquiera de las actividades antes mencionadas deberá realizarse con participación de Energía y Minerales Sociedad del Estado -EMSE-**, ya sea por sí o por acuerdo con terceros.

Mientras que, en el 5°, “La Función Ejecutiva tomará las medidas administrativas necesarias para **fomentar el aprovechamiento del litio** de la manera que mejor importe al desarrollo del modelo de sostenibilidad del Estado Provincial, **en el cual tendrán fundamental preponderancia las empresas del Estado**, las que gozarán de un derecho de preferencia y/o prioridad de descubrimiento y/o de cualquier otro derecho minero en las zonas de interés”.

Responde el IADEM “**El Estado Provincial no puede siquiera intentar apropiarse de los derechos para monopolizar el negocio minero.** Más allá de lo reprochable de dicho accionar, cabe recordar que los artículos 346 y siguientes del Código de Minería son claros al establecer que **el rol del Estado se limita a la investigación** (por sí o con terceros), y que **el desarrollo ulterior de la actividad, incluyendo la explotación, corresponde a la actividad privada**, a la cual -como regla general- **deben ser transferidas incluso las minas que descubran los organismos estatales**”.

Más claro imposible, el grito de guerra de los privados es ¡¡¡“solo nosotros podemos monopolizar la minería”!!!

La UIA (Unión Industrial Argentina) también apuntó contra la provincia de La Rioja. “¿Qué queremos? ¿Qué se frenen (las inversiones)? ¿Qué se pase la hora del litio?”, se preguntó Funes de Rioja, presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina).

Cuestionó lo que considera una “incertidumbre” en el sector minero los alcances de la ley aprobada en la provincia de La Rioja. “La inversión es siempre muy susceptible al entorno de seguridad jurídica, de certezas y de reglas de juego”.

Dice que “En este caso adquiere más trascendencia porque

el litio forma parte de “las grandes oportunidades de la Argentina”, el cual junto con el resto de la minería tiene “un horizonte fenomenal””. Ciertamente es una gran oportunidad para un sector empresario para afianzar sus vínculos con las transnacionales y también para concretar el pago de la deuda externa fraudulenta.

“**Es un acto de intervención política** y este acto lo que constituye es un dato de incertidumbre cuando lo que necesitamos en esta materia es lo contrario”. “En todo caso, si hay que ajustar cosas, es sentándose en una mesa primero y no dejando en suspenso todo, generando condiciones de precariedad y de absoluta falta de confianza en las reglas de juego. Eso no es bueno para la Argentina”. “Necesitamos políticas que generen confianza para la inversión y el crecimiento”.

Si bien consideró que hasta el momento La Rioja “no tiene tanta importancia relativa en el tema litio”; afirmó que “el inversor extranjero mira todos los detalles y obviamente mira los aspectos jurídicos y, para ellos, estas señales son malas”.

Dice Parrilli: “**nuestro marco normativo es el más atractivo para la inversión extranjera. Para ellos sería un pecado modificarlo, ya que generaría “desconfianza” en los inversionistas y sacaría a nuestro país de su “virtuoso sendero exportador”.**

Para el gran capital toda señal de intervención del Estado, de control, aunque sean medidas tímidas, pone en alerta todo su sistema. Revelan hasta dónde llega el carácter antinacional, entreguista e irreversible, de esta clase.

Las exportaciones cerrarán con un récord, cercano a los u\$s 700 millones. Si bien en toneladas (acumulan 27.500) el volumen es similar al 2021, “el importante alza de precios lleva a un crecimiento del valor exportado de más del 220%” (Bolsa de Comercio de Rosario).

El gobierno de Alberto Fernández comenzó a trabajar desde antes de asumir para entregar la minería a las transnacionales y sus socios locales, provocando el rechazo popular especialmente en Mendoza y Chubut. Colocó en funciones estratégicas en el Gobierno a sectores vinculados a ese fabuloso negocio como denunciarnos varias veces. Todos los precontratos que había negociado tuvieron que guardarlos hasta mejor oportunidad.

Qué paradoja que ahora se irriten con la postura de una Provincia amenazando con la intervención de la Corte y otras medidas, cuando festejaron el traspaso de los recursos a las provincias con la reforma de Menem-Alfonsín, en 1994, sabiendo que les sería más fácil negociar con cada gobernador, en condiciones más débiles.

Una política que defienda el interés nacional y no los intereses de los acreedores y el capital financiero internacional debe partir de estatizar toda la explotación del litio para poder garantizar plenamente su utilización para nuestro desarrollo. Exactamente lo opuesto a lo que reclama la voracidad capitalista.

www.por-cerci.org

 11 2351 4699



Partido Obrero Revolucionario - Masas - Argentina

ATEN: Comienza el debate salarial

Las maestras merecemos un sueldo que alcance para vivir

La última semana de enero comenzó la negociación salarial entre ATEN y el gobierno del MPN. La provincia de Neuquén aparece en el mapa político como una de las mejores en términos económicos del país, la producción petrolera se ha triplicado desde que comenzó la explotación en Vaca Muerta y el presupuesto de este año es mayor al anterior, incluso se proyecta un superavit de 36.806 millones de pesos. Sin embargo, el 37 % de la población está en la línea de la pobreza y el presupuesto 2023 sólo contempla la construcción de siete escuelas. En la primera negociación la burocracia informó que los funcionarios explicaron “los límites” que tendrían para dar aumentos.

El punto de partida de la negociación que tienen que debatir los trabajadores es en base a sus necesidades. El primer aspecto a tener en cuenta es que una maestra que recién comienza, en el sueldo de febrero ganará \$140.000 por cargo, es decir menos de la mitad de la canasta familiar. Un segundo aspecto, y tan importante como el primero, es la reactualización o escala móvil. Los sueldos de los estatales neuquinos reciben un reajuste trimestral de acuerdo a un índice que se prorratea entre la inflación de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén. La inflación se ha disparado de tal manera que este IPC trimestral no alcanza a recomponer la pérdida salarial producto de la inflación. El gobierno y la burocracia alagan el acuerdo 2022, dicen que “el acuerdo le ganó a la inflación”, ya que los ajustes por IPC finalizaron con el 135,5 %. Pero no debemos

dejarnos engañar por los porcentajes, es la capacidad de compra la que nos debe guiar, por más ceros que tenga el recibo si no llegamos a fin de mes debemos pelear por un aumento al básico y el horizonte debe ser un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar en un solo cargo (en la Patagonia por encima de los \$350.000). En relación al IPC, las asambleas votaron masivamente el año pasado la necesidad de que la reactualización sea mensual.

Si bien la burocracia se juega a maniobrar el pliego y a un conflicto corto, es evidente que todas las acciones que se desarrollaron el año pasado desde la oposición han generado una presión a la burocracia. La burocracia de ATE habla de la necesidad de un IPC bimensual y la de ATEN tuvo que incluir en sus declaraciones la lucha por cargos para primaria e inicial.

Se debe impulsar un plan de lucha fuerte para la disputa salarial, para ello estuvimos fortaleciendo la base y el activismo durante todo el año pasado. Tenemos que apoyarnos en el cuerpo de delegados y en todas las acciones que realizamos. Recordemos que en las medidas de fuerza se fue construyendo un pliego integral que incluye salario, condiciones laborales y la reforma educativa. A esta construcción de programa y del activismo, se debe sumar la coordinación con las seccionales opositoras y el refuerzo de una campaña a los compañeros que están en el interior de la provincia.

La burocracia comienza su campaña para atacar el Estatuto docente

¿Qué es el estatuto docente? ¿Cuál es la diferencia con el convenio colectivo?

El estatuto del docente es una Ley que regula los derechos y obligaciones de todos los docentes. A diferencia de los convenios de trabajo, NO es producto de una negociación, el Estatuto es fijado por Ley y sólo una ley puede ser modificado por la Legislatura. Esta Ley regula los mecanismos de ingreso, permanencia y ascenso de los trabajadores de la educación. En el origen de la docencia la designación de docentes era a dedo, por lo tanto, lo hacía el poder político de turno.

El primer Estatuto Nacional se sancionó en el año 1958, luego las dictaduras posteriores lo eliminaron, recordemos que entre los compañeros desaparecidos hay cientos de docentes. En el año 1983 se restituyó el Estatuto Docente. En esa década y con el surgimiento de las luchas por condiciones salariales se produjeron grandes huelgas

docentes. Posteriormente, en los '90 se desarticuló el Sistema Educativo Nacional, una de sus principales medidas fue el pase de las escuelas nacionales a provincia. Así, los estatutos provinciales tomaron como modelo para su elaboración el Estatuto Nacional.

Una de las principales conquistas es que el acceso al trabajo no implica filiación partidaria ni sindical. Otras conquistas fundamentales son: a igual trabajo igual remuneración, régimen laboral, traslado, cambio de funciones, licencias para estudiar, conformación de las Juntas de Clasificación, evaluación interna, poder recurrir a la evaluación si no hay acuerdo, edad jubilatoria y el 80% móvil, entre otras.

¿Cómo intentan disfrazar la reforma laboral?

En Neuquén no pueden hacer una reforma como hicieron en CABA, donde el gobierno de la Ciudad la impuso.

Por ello, así como lo hicieron con la reforma educativa, lo intentarán hacer de la mano de la burocracia. Tampoco pueden hablar de privilegio, por eso dicen: “que el estatuto es viejo”, “que hay que actualizarlo” y la gran zanahoria “que se necesita reglamentar la eximición del impuesto a las ganancias”.

Para el MPN sería un triunfo poder desarticular a la docencia implementando un Convenio Colectivo, como ya lo hizo con el resto de los estatales. Para la burocracia de ATE es un negocio redondo, en primer lugar, porque cobran por el uso del convenio un porcentaje, por lo que la afiliación es prácticamente compulsiva, y en segundo lugar porque les genera un gran negocio en la oferta de

cursos de capacitación. Recordemos que uno de los puntos a los que ataca es al equilibrio que otorga el Estatuto entre experiencia y formación para dar lugar al mérito y de esa manera cooptar ideológicamente a la docencia.

¿Cómo nos organizamos para defenderlo?

Debemos caracterizar a las nuevas generaciones de docentes, quienes han accedido al trabajo durante la pandemia o que han llegado de otras provincias, con lo cual desconocen sus derechos y cómo se conquistaron. Nos corresponde iniciar una gran campaña en defensa del Estatuto, donde expliquemos los derechos allí conquistados.

En abril serán las elecciones en Neuquén Los revolucionarios debemos desenmascarar que la democracia burguesa es una forma de la dictadura del capital

Se acerca la fecha de las elecciones y el MPN, que gobierna hace más de 6 décadas, se juega a seguir controlando las arcas del Estado. Si bien el candidato Koopman es un perfecto desconocido, desde el aparato de gobierno han puesto millones en la campaña electoral. Es que no quieren perder por ningún motivo el control del jugoso presupuesto de la provincia, de todos los negociados a los que acceden a través de la obra pública y de la explotación petrolera. Aunque hasta el año pasado parecía que la interna con el ex gobernador Figueroa, que ha conformado una alianza por fuera del MPN, hacía peligrar por primera vez la conducción de la Provincia, los números indicarían a Koopman como ganador. Por su parte, la oposición patronal ha presentado a los candidatos locales del FdT con Rioseco a la cabeza, y Cervi entre otros.

La presentación de listas cierra el 10 de febrero y el FITU hasta ahora no ha dado a conocer sus candidatos. Los partidos que integran este frente están disputando los principales candidatos y el tiempo de rotación. En algunas de las declaraciones de sus posibles candidatos se puede ver lo lavado de la campaña electoral. El ahora diputado Andrés Blanco, del PTS, dice que la lucha la dan: “en las calles y en las elecciones” y gran parte de sus declaraciones apuntan contra Milei.

Como lo hemos expresado en materiales anteriores, NO criticamos que la izquierda se presente a elecciones, criticamos el rol que juegan. Las elecciones burguesas son uno de los mecanismos de legitimación del sistema capitalista, y los revolucionarios estamos obligados a de-

nunciar su carácter de clase y combatir toda ilusión en que los explotados podríamos obtener alguna mejora en nuestras condiciones de vida con el voto. Por ello no es comparable la lucha en las calles con la lucha en las elecciones. Las asambleas de trabajadores, la acción directa, la organización propia de la clase obrera y del resto de los oprimidos son el embrión de nuestro propio poder. Estos métodos están basados en la verdadera democracia, la democracia directa y obrera. Esto es lo que hay que decir en la campaña, no que necesitamos diputados de izquierda. ¡Con estas ideas, con el programa de la clase obrera, intervinimos los revolucionarios en las elecciones burguesas!

Las elecciones burguesas por su parte tienen como objetivo conformar organismos que son ajenos a nuestra clase como La Legislatura o la elección del gobernador. La ley que las regula es la Constitución que tiene como aspecto programático principal la defensa de la propiedad privada. No hay forma de dar respuesta a las demandas más básicas de los trabajadores como vivienda, salud, educación o salud, entre otros, si no terminamos con el sistema capitalista. Es en este sentido que la idea de que se da “la pelea en las calles y en las elecciones” es incorrecta, o, mejor dicho, desvía a la conciencia de los trabajadores para generar confianza en las elecciones burguesas y sus instituciones. Para fortalecer la democracia burguesa están los partidos patronales, al partido que reivindica la revolución social, el POR, le toca dar una dura batalla en las elecciones burguesas para combatir las ilusiones democráticas.



Libertad a Facundo Jones Huala
Libertad a las presas mapuches



Apuntes para el debate sobre el peronismo

Perón regresó a la Argentina el 17 de noviembre de 1972. Y definitivamente, el 20 de junio de 1973. ¿Para qué? ¿Con qué objetivos políticos?

Debemos comenzar analizando esta situación desde su abandono del poder en 1955 teniendo las fuerzas sociales necesarias para oponerse y mantenerse en el poder. ¿Por qué decidió irse? Porque su proyecto nacionalista se había empezado a agotar. Desde la Primera Guerra Mundial hubo una transformación en la economía del país y también en la política con el surgimiento y potenciación de los movimientos nacionalistas burgueses. También marcó el comienzo del final de Inglaterra como principal potencia imperialista (que dominaba el país) y el rápido crecimiento de la penetración de EE.UU. desplazando a Inglaterra y profundizando el sometimiento nacional. Cualquier proyecto de liberación nacional exigía una ruptura decidida con el imperialismo, que ni el peronismo ni la burguesía estaban dispuestos a realizar.

A partir de su derrocamiento, quedó objetivamente como último recurso ante una agudización de la lucha de clases que pusiera en peligro la permanencia de la burguesía en el poder. Su enorme ascendencia política sobre las masas trabajadoras garantizó su retorno al país, tras permanecer por más de 17 años de exilio, como la última esperanza para subordinar a los trabajadores al marco legal del Estado burgués, de abandonar su insurgencia.

A pesar de los fusilamientos, detenciones en masa, intervenciones en todos los sindicatos y la CGT, los trabajadores permanecieron en lucha recuperando la CGT y los sindicatos y convocando a plenarios obreros (Huerta Grande 1957 y La Falda 1962) donde se elaboraron los programas más avanzados de la época en defensa de nuestra soberanía política, independencia económica, y el rol central de los trabajadores en todas las resoluciones políticas-económicas y sociales que se tomaran desde el gobierno (programas cuya mayor limitación era que reconocían la dirección política del peronismo). En este proceso de ascenso del movimiento obrero se produce la lucha obrera-estudiantil del Cordobazo que marcaría el comienzo de una nueva etapa política. Luego, Sitrac-Sitram (1970/71) y los sindicatos clasistas en lucha; Villa Constitución y su extraordinaria huelga general durante más de un mes (1975); las coordinadoras interfabricales del Gran Buenos Aires (1975/76), etc.

Extraordinarias movilizaciones obreras y estudiantiles se sucedían a diario poniendo en jaque al gobierno burgués, arrancando fuertes conquistas. Esta era la situación política en el regreso de Perón a la Argentina. ¿Qué sucedió desde entonces a la actualidad?

Argentina controlaba desde el Estado todos sus puertos, sus vías marítimas y fluviales, su flota mercante transportaba sus mercancías por todo el mundo, sus astilleros navales estaban en plena producción. En el Plumerillo Mendoza había una fábrica de aviones argentina. Los ferrocarriles cubrían todo el territorio nacional con locomotoras y vagones de carga y de pasajeros de producción nacional (Tafí Viejo). Las rutas eran construidas y mantenidas por Vialidad Nacional, de libre circulación, sin pagar peajes como ahora. Fabricaciones

militares producían vehículos blindados, tanques y tanquetas, aviones de combate (Pampa y Pucará) y hasta cohetes y misiles. Prácticamente había pleno empleo, en su mayoría con empleos registrados, con salarios mínimos con un poder adquisitivo muchísimo más elevado que hoy. En 1975, bajo el gobierno peronista de Isabel Perón, se implanta una política de fuerte ajuste contra los oprimidos, denominada "Rodrigazo".

Lo primero que hizo Perón en su retorno fue dar un respaldo a la burocracia colaboracionista, podrida, corrompida, que el movimiento obrero venía reemplazando con nuevos dirigentes clasistas. El mayor problema era que la mayoría del movimiento obrero, incluso buena parte de la vanguardia en lucha, seguía reconociendo a Perón como su jefe, con fuertes ilusiones y aquellos sectores que no tenían ninguna ilusión quedaban transitoriamente aislados llamando a enfrentar el "pacto social" que impulsaba el gobierno.

Perón buscó destruir también la unidad obrera-estudiantil que había sido una conquista histórica del movimiento obrero. En el movimiento estudiantil también se produjo un período de desmovilización debido a las ilusiones en Perón. Las ilusiones en su autoridad fueron un factor de confusión y división en las clases medias.

Reimplantar su vieja consigna "del trabajo a casa y de casa al trabajo" para aislarlo del resto de la sociedad, acentuar la despolitización del movimiento obrero para así subordinarlo a su dirección política. Dividió, desmovilizó y, sobre todo, desmoralizó a la nueva vanguardia obrera y estudiantil durante un período, que no pudo rearmarse y no pudo enfrentar la política golpista del imperialismo que significó la cruel derrota impuesta por el imperialismo yanqui a través del Plan Cóndor y las dictaduras militares. El mayor retroceso social de la historia de los pueblos trabajadores de Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina.

Las consecuencias las tenemos a la vista: derrota histórica del movimiento obrero que padeció la detención y desaparición de sus nuevas direcciones, de sus cuerpos de delegados y comisiones internas que fueron el corazón del mismo. Esa derrota fue la condición para imponer la entrega del país y el retroceso brutal de nuestras condiciones de vida. La Nación fue diezmada, todas sus empresas privatizadas a precio vil, sus recursos naturales controladas por multinacionales, el Río Paraná en manos de multinacionales sin control por parte del Estado. Sin salida marítima, ni fluvial soberana, se sale por Uruguay. Etc. Etc. ¿Para qué regresó Perón? Él creó las condiciones políticas para que se aplicara el Plan Cóndor, bajo su gobierno se organizaron las AAA, bajo su gobierno empezó la feroz represión estatal y paraestatal contra el movimiento obrero y la juventud para que la dictadura pudiera hacer lo que hizo. Esta es la responsabilidad política histórica de Juan Domingo Perón, que, en algún momento, la emancipación política de la clase obrera rendirá cuentas con él.

Nosotros, el Partido Obrero Revolucionario, expresión consciente de los intereses históricos del proletariado, debemos esclarecer minuciosamente este proceso histórico en

Argentina y toda Sudamérica hasta comprender el descomunal retroceso nacional y social que estamos padeciendo, y las tareas que debemos desarrollar para emanciparnos como Nación y como clase explotada, agrupando a todos los oprimidos bajo nuestra dirección política, a través del Frente Único Antiimperialista. Tomar el Poder y establecer la Dictadura

del Proletariado, que significará la unidad del conjunto de la Nación oprimida en lucha por su emancipación Nacional y Social hacia el socialismo, hasta fusionarse con el Comunismo científico universal que expresará la liberación definitiva de la humanidad.

Se sigue alimentando el parasitismo financiero

La emisión monetaria se desbordó a lo largo de toda la gestión. Un fiel reflejo de ello es como crecieron los pasivos del Banco Central durante los últimos años.

Solamente el stock de **Leliq** pasó de \$ 900.000 millones en 2020 a \$ 8,42 billones en 2023. Y la tasa de interés pasó de 38% en 2021 a 75% hoy.

Como ese volumen de pasivos remunerados ya supera los \$10 billones de pesos, todos los meses el Banco Central debe emitir \$550.000 millones nada más que para pagar intereses.

Alberto Fernández en campaña había prometido: “Voy a dejar de pagar la usura que se llevan los bancos con las Leliq” para financiar el pago de remedios para jubilados y, por caso, “salarios dignos para los maestros”.

Ningún gobierno se anima a terminar con la reforma financiera de la dictadura militar y mucho menos a terminar con todo el parasitismo financiero. Y alimenta una bomba que estalla de tanto en tanto dañando la economía de los más pobres.

Internacional

Artículos del CERC

El avance de la ultraderecha, una muestra más de la debacle de EE.UU.

Tras cuatro jornadas y quince votaciones, McCarthy fue elegido presidente de la Cámara Baja el 7 de enero, en sustitución de la demócrata Nancy Pelosi, tras la victoria republicana en las elecciones de noviembre.

Sin un presidente de la Cámara Baja, el 118° Congreso no podía retomar sus actividades. Es la tercera figura política más importante de EEUU después del presidente y el vicepresidente. Los nuevos legisladores no podían asumir sus cargos y en consecuencia tampoco votar proyectos de ley.

Por primera vez en cien años, el presidente de la Cámara de Representantes no fue elegido en la primera votación por tener detractores dentro de su propio partido. La última vez que se necesitó más de una votación fue en 1923, en ese año el presidente de la Cámara fue elegido en el noveno intento. En 1869 tuvieron que hacerse sesenta votaciones.

La elección de McCarthy estuvo bloqueada por la **oposición, 20 republicanos de ultraderecha, muchos de ellos seguidores de Trump, y miembros del ultraconservador grupo Freedom Caucus**, que tenían una serie de exigencias para apoyarlo, como poder hacer una moción de censura contra el presidente de la cámara, varias sillas en el comité que decide qué leyes se van a discutir, la cabeza en varios subcomités y tener relevancia dentro del Comité de Asignaciones, uno de los más poderosos, entre otros.

Sólo pudo lograr el voto concediéndoles gran parte de sus reclamos.

El **Freedom Caucus**, “una banda de republicanos de extrema derecha ejercerá más poder que nunca en el Congreso” (The Economist). Son unos 50, sus compañeros republica-

nos los comparan con “terroristas legislativos” y talibanes, 19 de los 20 legisladores que forzaron 15 rondas de votación para el puesto de presidente pertenecen al grupo.

¿Qué reclaman? Recortar gastos y reducir el tamaño del gobierno. Muchos apoyan una prohibición nacional del aborto y mayores restricciones a la inmigración. El Caucus está dispuesto a implementar tácticas duras convirtiéndose en rehén de legislación vital sobre presupuestos o el techo de la deuda.

En los próximos meses se abrirán negociaciones para elevar el límite de la deuda pública estadounidense (sin elevar el límite corre el riesgo de incumplir con su deuda) la financiación del Estado federal y el desbloqueo de ayudas suplementarias para Ucrania. En el poder de la Cámara Baja, los republicanos prometieron lanzar una serie de investigaciones sobre la gestión de Biden de la pandemia o de la retirada de Afganistán.

Es parte del fenómeno internacional de fortalecimiento de grupos ultraderechistas y fascistas en el mundo. En Latinoamérica, Brasil con los bolsonaristas y sus acciones golpistas; en Perú seguidores de Fujimori y otros para destituir a Castillo; en Colombia amenazando a candidatos y funcionarios, provocando masacres; en Argentina atentando contra la vicepresidenta, con manifestaciones de ultraderecha; etc. siempre financiados por sectores del gran capital, por terratenientes, banqueros. Expresan la acelerada descomposición capitalista y la incapacidad y caducidad de las formas democráticas para contener las crisis. Los gobiernos llamados progresistas o de izquierda democrática terminan en frustraciones para sus seguidores

Once meses de guerra en Ucrania: un paso más en la escalada militar

Sólo la clase obrera en lucha por su programa puede romper las tendencias bélicas del imperialismo

La retomada de posiciones por parte de las fuerzas rusas en la región de Donbass y el plan de Estados Unidos de reforzar aún más la resistencia ucraniana con el envío de tanques británicos y alemanes indican la prolongación y mayor ferocidad de la guerra. Los potentes tanques conectados con el sistema de misiles Patriot aumentarán la capacidad de defensa y ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este plan da un paso más hacia la materialización de la presencia directa de la OTAN en el enfrentamiento, que dura ya once meses en suelo ucraniano. Por eso hay discordia en el seno de la alianza liderada por Estados Unidos.

La caída de la ministra de Defensa alemana, Christiane Lambrecht, indica la agudización de las diferencias en el seno del gobierno socialdemócrata sobre una mayor implicación alemana en la guerra. Biden presiona al Primer Ministro, Olaf Scholz, para que autorice el envío de tanques Leopard 2 almacenados en países asociados o próximos a la OTAN. Todo indica que el fracaso de la reunión del 20 de enero en la base aérea de Ramstein (Alemania), a la que asistieron más de 50 países, no logró convencer a Olaf Scholz de que cediera a la petición de Biden. El Reino Unido, que sirve de punta de lanza del imperialismo estadounidense, aprobó la entrega de tanques Challenger 2, con el objetivo de que Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Francia realicen una nueva ofensiva armamentística con los tanques, el sistema Patriot y los misiles Himars.

Paso a paso, la guerra limitada a Rusia y Ucrania tiende a generalizarse y puede traspasar sus fronteras. Tras esta reforzada intervención en forma de apoyo exterior, puede llegar el envío de aviones de guerra, que ha sido evitado por la OTAN, debido al desacuerdo de los aliados europeos, al considerar que se estaría acercando a una extrapolación de la guerra, que implicaría a toda Europa.

Estados Unidos, que habría aportado 24.000 millones de dólares de los 40.000 ya gastados sólo en armamento, recurre a todas las fuentes para prolongar la guerra. El Pentágono utilizará una gran reserva de municiones que se mantiene en Israel. El gobierno israelí ha intentado mantenerse al margen de los acontecimientos en Ucrania, a pesar de la presión estadounidense. Tales medidas indican la estrategia de Biden de arrastrar tras su alianza al mayor número posible de países, lo que presupone la posibilidad de que la guerra estalle fuera de los confines de Ucrania.

Todo indica que el enfrentamiento superará la barrera del año y podría entrar y prolongarse hasta el año que viene. El problema es que la guerra será más destructiva y estará más cerca de una intervención directa de la OTAN. El peligro de iniciar una tercera guerra esta colocada más hoy que el 24

de febrero de 2022. La escalada militar en Asia está dando nuevos pasos. Japón ha decidido aumentar su inversión en la industria armamentística. Corea del Sur ha anunciado que podría adquirir armas nucleares. Y Taiwán ha reforzado su aparato militar con el apoyo de Estados Unidos.

Las tendencias belicistas impulsadas por el imperialismo, bajo hegemonía estadounidense, se vienen gestando y fortaleciendo desde hace tiempo en el marco de la crisis de sobreproducción, el agravamiento del parasitismo financiero y la guerra comercial. La intensificación del cerco económico-militar a la Rusia restaurada y la consiguiente guerra en Ucrania se han convertido en el epicentro de la nueva etapa de la desintegración del capitalismo y, por tanto, de la irradiación de la crisis en Europa hacia todo el mundo, que, por el momento, se manifiesta en forma de estancamiento económico, inflación, encarecimiento de la vida, empobrecimiento y miseria de un contingente creciente de las masas trabajadoras.

El proceso de desintegración del capitalismo, que surge de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, entre estas últimas y las fronteras nacionales, ha hecho imposible que una fracción del imperialismo detenga a otra que obliga a pasar a la guerra. Es lo que vemos con la constitución del frente montado por Estados Unidos con las potencias europeas, bajo la tutela de la OTAN, que ha transformado a Ucrania en carne de cañón para alcanzar sus objetivos expansionistas y anexionistas.

El imperialismo se mueve casi libremente, ya que no se enfrenta a la resistencia del proletariado y de las masas que constituyen la mayoría oprimida. Lo mismo ocurre con la Rusia restaurada, que utiliza su estatus de potencia regional para oprimir a las antiguas repúblicas soviéticas, que son atraídas por el imperialismo y que no pueden mantener su independencia.

Sólo a través de la lucha de clases será posible luchar por el fin de la guerra en Ucrania y evitar una catástrofe mayor, que se vislumbra en el horizonte de la crisis mundial. Lo que explica la ausencia de una poderosa resistencia de los explotados a la ofensiva del imperialismo y a la guerra en Ucrania es la crisis de dirección, la ausencia de partidos revolucionarios y del Partido Mundial de la Revolución Socialista. Sin embargo, las condiciones objetivas para los levantamientos obreros y populares están plenamente dadas.

Europa Occidental se enfrenta a huelgas y manifestaciones en varios países. El 20 de enero, Francia se vio sacudida por una huelga general contra la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron. Más de un millón de trabajadores salieron a la calle en todo el país. Los trenes estaban para-

lizados y las calles bloqueadas. Sumada a los movimientos del Reino Unido, Bélgica, España, Portugal, Alemania, etc., la huelga general en Francia refleja la necesidad de los explotados de defenderse contra la devaluación del valor de la fuerza de trabajo, las medidas antipopulares de los gobiernos y el empobrecimiento generalizado de la familia trabajadora.

Es a través de la lucha que los oprimidos sentirán, verán y descubrirán las razones de la guerra, su contenido de clase y su carácter de dominación. Acabarán por liberarse de la ceguera impuesta por la política burguesa, que les impide tomar conciencia de la necesidad de luchar por el fin de la gue-

rra. El paso que dé la clase obrera europea contra la guerra de dominación convergerá con las respuestas programáticas que ha dado el Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional. Ninguna otra clase será capaz de levantarse contra el asedio imperialista a Rusia, por el fin de la guerra y por el establecimiento de una paz sin desmembramiento de Ucrania y sin anexiones. Es bajo la estrategia de la revolución socialista y del internacionalismo proletario, que las masas golpearán las tendencias belicistas del imperialismo.

(POR Brasil – Editorial, Masas n°681)

Evo Morales, ¿el artífice de las movilizaciones indígenas en el Perú?

En el Perú, como ocurre en Bolivia, está presente el problema no resuelto de la opresión nacional sobre los pueblos originarios, particularmente sobre las naciones indígenas aymara, alrededor de Lago Titicaca, y quechua en todo lo que fue el imperio incaico.

La oligarquía peruana, profundamente conservadora, reaccionaria y vendepatria, nostálgica de la Lima Virreinal, que canta valsecitos como “no hay nada mejor que ser que un señor de aquellos que vieron mis abuelos” o, “fina estampa, caballero, caballero de fina estampa ...”, políticamente agotada se retuerce en una terrible crisis política que se traduce en una descomunal inestabilidad política. Ese parlamento compuesto por infinidad de pequeños partidos políticos cambia presidentes como camisetas en medio de una corruptela que corroe los órganos de gobierno. Tan alejada de ese sur peruano sumido en el atraso, donde las transnacionales saquean las riquezas minerales del Perú a placer.

En medio de esa crisis surge la figura de Pedro Castillo, un profesor rural que adquirió notoriedad dirigiendo la huelga de maestros del año 2017 contra la administración de Pedro Pablo Kuczynski, en demanda del incremento de los sueldos de los maestros, la derogación de la Ley de la Carrera Pública Magisterial y el incremento del presupuesto en el sector educación, entre otros. Luego Castillo desarrolla una campaña política con un discurso reformista reivindicativo de los derechos indígenas planteando la necesidad del cambio de la Constitución Política del Perú y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

El 11 de abril de 2021, en la primera vuelta, Castillo obtuvo el 19% de los votos, colocándose en el primer lugar de los candidatos para enfrentarse en la segunda vuelta a la corriente reaccionaria representada por Keiko Fujimori, en la que gana por un escasísimo margen.

La conservadora oligarquía peruana se propone derrocar a Castillo desde el primer día. El gobierno de Castillo debuta envuelto en medio de graves denuncias de corrupción y una tremenda crisis interna, pero las masas indígenas del sur del Perú que se ilusionaron con Castillo no tuvieron el tiempo suficiente para desencantarse y tras su destitución por el Congreso peruano, estallan en la rebelión que sacude al Perú.

La oligarquía y el gobierno de Dina Boluarte tratan de aho-

gar en sangre la rebelión sureña y sus políticos; como ocurre siempre, presentan el hecho político como obra de algunos agitadores. Han llegado al absurdo de culpar a Evo Morales como el instigador y propugnador de una división del Perú y a los Ponchos Rojos de Bolivia de entregar armas a los campesinos peruanos.

En Bolivia politiqueros de la vieja derecha hacen eco de las absurdas denuncias de sus homólogos peruanos. Y la impostura masista pretende sembrar la idea de que Evo Morales, que se considera líder indígena internacional, y sus colaboradores que han estado viajando activamente metiendo sus narices, al vecino país en los últimos meses, son los inspiradores y organizadores de la monumental rebelión, principalmente campesina, en el sur del Perú. A esta falacia se suma la decisión del parlamento peruano de condenar la intervención de Morales en la política interna violando la soberanía del Perú y, consecuentemente, lo declara persona no grata y prohíbe su ingreso al país en el futuro.

Todo lo dicho, tanto por los impostores masistas como por los parlamentarios derechistas del vecino país, significa ignorar la centenaria lucha de los indígenas peruanos, primero contra la colonización españolas y, después, contra el Estado oligárquico vende-patria y opresor. No olvidar que desde la localidad de Tinta bajo la dirección de José Gabriel Condorcanqui (Tupac Amaru) se inspiraron y dirigieron las movilizaciones indígenas en el Alto Perú y otras regiones del continente en la segunda mitad del siglo XVIII; posteriormente, durante la República, no paró la resistencia de los indígenas que influyeron poderosamente en los políticos y pensadores de diferentes épocas, como Carlos Mariátegui. La movilización indígena, contra la opresión imperialista asentada en la actividad minera y contra la oligarquía levantó la bandera de su autodeterminación y, ahora, vuelven a enarbolar la consigna de una nueva nación indígena del sur del Perú.

Frente a esa rica experiencia de los explotados indígenas del Perú ¿qué importancia puede tener la presencia y la prédica posmodernista de Evo Morales? No olvidar que el posmodernismo es enemigo jurado de la autodeterminación de los pueblos oprimidos, perspectiva que sólo puede materializarse con el gobierno obrero campesino.

(POR Bolivia – Masas n°2729)

Perú: ¡Repudiamos la violación de la autonomía universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos!

**Viva la lucha de los universitarios junto a los trabajadores, obreros, campesinos e indígenas del Perú contra el gobierno criminal de Dina Boluarte
¡Abajo el gobierno criminal de Boluarte y su congreso!
¡Fuera Jeri Ramon (rectora) de la San Marcos!**

URUS – UMSS, Bolivia -Cochabamba, 22 de enero de 2023

La intervención de la policía nacional del Perú (PNP) a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con tanquetas y un contingente policial, el cual se evidencia fue coordinado entre la Rectora Jeri Ramón y el gobierno de Dina Boluarte; es una grave violación de la Autonomía Universitaria cometida al típico estilo de los gobiernos dictatoriales, que tienen por objetivo aplastar mediante un brutal represión con rasgos fascistas la unidad de los estudiantes con los campesinos, y la creciente movilización popular, que exigen la renuncia de la presidenta, el cierre del congreso, asamblea constituyente, etcétera.

La Autonomía Universitaria es una conquista que ha costado sangre a los universitarios del Perú, Bolivia, así como los demás países del continente latinoamericano y debemos defenderla intransigentemente. La Autonomía Universitaria nos permite a las universidades autogobernarnos, decidir sobre nuestras normas académicas, nuestros recursos, impulsa la investigación, la libre difusión de las ideas y de acción. Esencialmente libra nuestras casas superiores de estudio de la intromisión del poder estatal, de su control secante y arbitrario que busca someter al movimiento universitario a la política de los gobiernos pro burgueses de turno y las transnacionales. Y en determinadas condiciones ayuda, mediante la acción de los estudiantes, a que la universidad actúe junto a los explotados expresando la política revolucionaria del proletariado.

En ese marco aplaudimos y respaldamos la decisión acertada de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) de abrir sus puertas para albergar a los campesinos, indígenas y universitarios que llegaron a la capital; acción que creemos debe replicarse en el resto de las Universidades Públicas del Perú. En Bolivia en muchas ocasiones las universidades públicas como la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Mayor de San Simón y los demás, abrieron sus puertas para acoger a los mineros, campesinos, indígenas, es decir, el pueblo explotado, en su

lucha contra las políticas anti populares y pro burguesas de los gobiernos de turno. Ratificamos categóricamente que la autonomía universitaria y las puertas de nuestras casas superiores de estudio, al contrario de lo que agitan la prensa derechista del Perú y el gobierno, están abiertas para el pueblo explotado.

La rebelión popular que inicio en el sur frente a la destitución del reformista y proburgues de Pedro Castillo, quien representa para amplias capas populares de sectores de trabajadores y campesinos, como el pisoteo de su derecho a la libertad de elegir a su gobernante; al día de hoy se generaliza en todo el país porque se asienta en el descontento del pueblo explotado peruano cansado de gobiernos vendepatrias que solo gobernaron para los ricos, los empresarios y las transnacionales, mientras a los trabajadores, maestros, campesinos, indígenas y clases medias empobrecidas se los sumía en la miseria y la pobreza. El gobierno de Dina Boluarte y la ultraderecha racista y fascista enquistado en diferentes partidos en el congreso, los cuales se sostienen en el poder gracias a las fuerzas represivas del ejército y la policía; responden a la rebelión popular con masacres (más de 50 muertos), brutales represiones policiales y la vulneración de la Autonomía Universitaria mediante la intervención de las Universidades Públicas.

Convocamos a los trabajadores mineros, fabriles, metalúrgicos, campesinos, universitarios y demás sectores populares a llevar adelante una huelga general indefinida, con paro de la producción, tomar las minas y fábricas y tierras, expulsar a los empresarios locales y extranjeros, y no caer en la trampa de elecciones o asamblea constituyente que en definitiva no cambia nada, sino tomar el poder en sus manos para cambiar de raíz el sistema económico y social del país. Solamente en esas condiciones, el centralismo, autonomías, federalismo y hasta la misma autodeterminación de las naciones aimaras y quechuas podrán ser una respuesta que beneficie al pueblo peruano.

**¡VIVA LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA AL SERVICIO DE LOS INTERESES DE
LIBERACION NACIONAL Y SOCIAL DEL PUEBLO EXPLOTADO DEL PERÚ!
¡ABAJO EL ESTADO BURGUES DEL PERÚ!
¡FUERA LAS TRANSNACIONALES DEL PERÚ!
¡POR UN GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO!**

realizarla en nueve meses su último acto de gobierno.

Todos los sectores manifiestan que no existe democracia en el país y que no los van a poder acallar. Es necesario politizar esa idea, para ayudar a terminar con las ilusiones democráticas y evitar que se recreen. Lo que se está procesando es un agotamiento de las formas democrático burguesas que apenas podían encubrir una verdadera dictadura civil.

El movimiento con sus acciones se está enfrentando a esa dictadura civil que se apoya en la Constitución de 1993, en el Congreso, en los medios de comunicación, y en el aparato represivo.

Es necesario intervenir en los movimientos para ayudarlos a entender que la única posibilidad de democratizar el país es tomando el poder político, disolviendo el Congreso y la Justicia burguesa. Que las organizaciones populares que están a la cabeza de este levantamiento deben tener como perspectiva convertirse en poder obrero y campesino. Dirigirse especialmente al proletariado minero para que intervenga activamente en esa línea. Y en este sentido es fundamental el trabajo para dividir y paralizar a las fuerzas represivas, para eliminar su poder de fuego. Es una de las enseñanzas de estas semanas de choques violentos con la represión.

Solo un gobierno que nace y se apoya en esa poderosa movilización podrá expropiar a las multinacionales, para terminar con el saqueo, expropiar los bancos y los grandes medios de producción. Esa es la única forma de garantizar la derogación de la Constitución y todos los pactos internacionales que atan al Perú y redactar una nueva, que garantice que será el nuevo Estado quien terminará con el poder de las multinacionales, con su gran propiedad, con su saqueo. La extraordinaria riqueza minera en cobre, plata, zinc, oro, estaño etc. se encuentra en la misma región andina donde se extiende la mayor pobreza.

No puede haber una Constituyente democrática con los fusiles de las fuerzas represivas apuntando. No puede haber una Constituyente democrática mientras el poder esté en manos de un pequeño sector enriquecido que es dueño de los grandes medios de producción y de comunicación. No puede haber una Constitución democrática con este sistema de partidos que garantizan la dictadura civil.

La burguesía acorralada, con las masas enfrentado su Estado, su Congreso, su Justicia, su represión, puede adelantar las elecciones, hacer renunciar a Boluarte y convocar a una Asamblea Constituyente, para ganar tiempo, para desmovilizar, para dividir, para aislar a los sectores más radicalizados, como ocurrió en Chile. Castillo-Boluarte llegaron al gobierno con el reclamo de una nueva Constitución que reforme el Estado, democratice la política y nacionalice sectores clave de la economía, lo que es inviable en los marcos de la descomposición capitalista, de ahí su fracaso.

Insistimos es muy importante alertar sobre este peligro. En qué condiciones se puede imponer una Asamblea Constituyente, que sólo podrá realizarse con el poder obrero-campesino. Un sector de la vanguardia que pro-

tagonizó las enormes luchas de 2019 en Chile se ilusionó con la Constituyente, se frustró y desmoralizó. La Constitución Plurinacional de Bolivia también fue un engaño para preservar el Estado burgués tal como existía, con algunos maquillajes.

Los sectores de izquierda que acompañaron la experiencia de Castillo-Boluarte con su participación en el gobierno o con su voto, desde Perú y desde toda Latinoamérica, sembraron la ilusión de que podría haber transformaciones desde ese gobierno, que se podía “cambiar el modelo neoliberal”. Deben sacar todas las conclusiones de esta experiencia que se fracturó a poco de andar y terminó con la vicepresidenta al servicio directo de la derecha. No hay vías pacíficas, democráticas, institucionales, constitucionales, para resolver las demandas sociales, democráticas, políticas de la mayoría oprimida.

Hoy la burguesía en plena crisis se orienta por la respuesta represiva, endurecer la mano contra los manifestantes, impedir que lleguen a Lima, pero ¿cuánto tiempo podrá soportar el país parado?. ¿Cuánto tiempo podrá sostenerse con un Congreso impopular y con abierta intervención de las fuerzas armadas?

La clase obrera debe intervenir, tiene una extraordinaria responsabilidad histórica, no puede dejar solos a sus aliados naturales, a sus hermanos los campesinos, los indígenas. Se debe superar la desorganización, la baja sindicalización, organizarse fuertemente desde las bases, aprovechar este momento de convulsión social. Es una oportunidad de terminar con el poder oligárquico y de las transnacionales. Las masas están poniendo el ojo en las enormes riquezas que se extraen para su exclusivo beneficio. La crisis política que ya lleva varios años muestra la incapacidad de la burguesía para salir de su podredumbre, de su corrupción y entrega.

La vanguardia más consciente que interviene en estos movimientos debe ayudar a comprender que se trata de única salida, una única lucha, que debe ir hasta el final, contra la minoría que detenta el poder, contra su propiedad, para poder alcanzar la victoria. Hoy la lucha tiene un componente democrático determinante. Se debe trabajar para procesar el resquebrajamiento de las fuerzas represivas que pertenecen mayoritariamente a los pueblos originarios y se pueda ganar a un amplio sector de sus bases hacia el movimiento popular.

El POR y el Cerci pueden opinar con autoridad. No llamamos a votar por Castillo en ninguna vuelta, señalamos que su programa de conciliación con las instituciones del Estado burgués sería impracticable y terminaría en la impotencia y en manos de la derecha. Terminó rompiendo con su propio partido. El CERCÍ, advirtió sin ambigüedades que estaríamos frente a un nuevo gobierno burgués, no de los oprimidos, en junio del 2021. La clase obrera tiene que construir su partido revolucionario basado en la estrategia de la revolución social que instaure un gobierno obrero-campesino, de la mayoría oprimida, para poder transformar la economía poniéndola a su servicio.



Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional

Rebelión popular en Perú exige la renuncia de Boluarte y repudia toda la politiquería burguesa

La rebelión popular en Perú es parte de un fenómeno internacional de levantamientos contra regímenes que garantizan el asalto a los recursos de los países, ajustan más a los oprimidos cada vez más empobrecidos y los reprimen bestialmente si se resisten. La agudización de la crisis económica mundial, viene acelerando el desgaste político de todos los gobiernos burgueses latinoamericanos.

Cuando las masas desbordan con su intervención todas las instituciones y desafían la legalidad y la represión durante semanas, nos dicen que estamos en una nueva etapa política, de incipientes características revolucionarias.

La base de semejante movilización fueron las organizaciones comunitarias de las poblaciones indígenas campesinas aymara y quechua. Básicamente de sus asambleas han salido las decisiones de bloquear los caminos y marchar sobre Lima pese a la brutal represión. Y ha crecido el movimiento nacional de apoyo a los pueblos andinos del sur. Desde todos lados marcharon las delegaciones a “la toma de Lima”.

Las comunidades aimaras informaron que, mientras sus paisanos se encuentran en Lima, la huelga indefinida con bloqueo de vías continuará. Se irán cuando la presidenta renuncie y el Congreso se cierre.

Los oprimidos se organizan para enfrentar la mayor violencia policial y militar en décadas, desarrollan también sus propias acciones ofensivas sobre los edificios públicos, aeropuertos, organizaron colectas de dinero y de víveres para que los marchistas puedan sostenerse. Las medidas de acción directa se replican por todo el país.

La Central Única Nacional de Rondas Campesinas llamaron a la realización de movilizaciones y bloqueos de vías.

Fue convocado el paro general para el jueves 19 y de hecho el país ya estaba paralizado desde dos semanas antes. La Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) aprobó el paro nacional y movilización para el jueves 19 de enero, en acuerdo con la Confederación General de Trabajadores del Perú. En la sede de la CGTP, representantes de las delegaciones de provincias se reafirmaron en el reclamo de dimisión de la presidenta y demandaron que no se produzca ni un muerto más.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas informaba que el día 19 había 144 puntos bloqueados en las vías nacionales de 19 regiones del país, debido a bloqueos humanos o con piedras y palos que han coloca-

do en las pistas. Cientos de camiones quedaron bloqueados en las fronteras.

Los jóvenes se sumaron a la movilización: estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad (UNSAAC) del Cusco, agrupados en la Federación Universitaria del Cusco y la Asamblea Regional del Cusco, los alumnos que tomaron de forma simbólica la puerta 3 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Grupos de estudiantes que llegaron a Lima permanecerán en las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Decenas de estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano dejaron Puno y en la Capital se unieron a las otras universidades y al bloque aimara.

El gobierno prolongó el estado de emergencia en varios departamentos. Utiliza masivamente gases lacrimógenos y mete bala. Han desplegado helicópteros y aviones y desplegado el máximo de uniformados. Hay cientos de detenidos y heridos, además de los más de 50 asesinados. Culpa a la injerencia de Colombia y Bolivia, al terrorismo y al narcotráfico, para tratar de ocultar que la base de la protesta está en el empobrecimiento generalizado de la población frente al enriquecimiento de una minoría, generando aún más rechazo.

El contenido de la movilización es político, la consigna principal es la exigencia de que Dina Boluarte renuncie ya. Fue rechazado su anticipo de elecciones para 2024. Y también el rechazo al Congreso que es controlado por la derecha golpista, que se disuelva. Las masas no quieren que Boluarte sea reemplazada por las autoridades del Congreso, porque es lo mismo. Piden la renuncia de la Mesa Directiva del Congreso que preside José Williams.

Una parte de los manifestantes reclama por el expresidente que fue destituido, por la libertad de Castillo. Gran parte de los pueblos indígenas, campesinos se identifican con ese presidente que era uno de ellos, un dirigente docente de origen campesino, que ha sido boicoteado todo el tiempo por la derecha que no aceptaba su triunfo electoral y que apenas ejerció un año y medio. No se terminó de procesar políticamente el fracaso de su proyecto político que reivindicaba el “Socialismo del Siglo XXI”.

Como parte de los reclamos populares aparece en algunos sectores la Asamblea Constituyente, para derogar la Constitución que dejó Fujimori. Era parte de la plataforma con que fue elegido Castillo y fue su convocatoria a